

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

**VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA CONSEJERA ELECTORAL, LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES RESPECTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EFECTÚA EL CÓMPUTO TOTAL, SE DECLARA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y SE ASIGNAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL, LOS DIPUTADOS QUE LES CORRESPONDEN PARA EL PERIODO 2015-2018.**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Constitución”); 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante “LGIPE”), 13, párrafo 1, fracción b) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (en adelante “Instituto” o “INE”) y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del INE, presento **VOTO PARTICULAR**, respecto del punto único del orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada el 23 de agosto de 2015, **relativo al Acuerdo [...] por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que les corresponden para el periodo 2015-2018.**

Previo a exponer los argumentos que sostienen este pronunciamiento, **es preciso señalar que mi disenso respecto del Acuerdo referido, se circunscribe a las determinaciones** adoptadas por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales que integran este Consejo General **relativas a:**

- A. Validar que militantes del Partido Revolucionario Institucional (en adelante “PRI”) que obtuvieron el triunfo en la elección del Proceso Electoral Federal 2014-2015, cuyo**

**registro como candidatos de mayoría relativa fue asignado indebidamente al Partido Verde Ecologista de México** (en adelante “PVEM”) —merced al convenio de coalición suscrito entre estos institutos políticos—, **sean contabilizados como Diputados del PVEM para efectos de la distribución de diputados por el principio de representación proporcional**, en detrimento de la efectividad del sistema de representación proporcional constitucional.

- B. Omitir establecer** en el Acuerdo aprobado **que si derivado de los resultados de la elección extraordinaria** a celebrarse en el distrito electoral federal 01 del estado de Aguascalientes, con sede en Jesús María, **se determina que el Partido del Trabajo** obtiene el 3% de la votación en la elección de Diputados Federales, y derivado de ello, **conserva su registro, deben llevarse a cabo las adecuaciones correspondientes a la distribución de diputados por el principio de representación proporcional** a efecto de garantizar: *i)* a dicho instituto político, el derecho a tener en la Cámara de Diputados una representación aproximada al porcentaje de su votación total, en los términos que prevé la Constitución; *ii)* a las candidatas y candidatos que postuló por el principio de representación proporcional, su derecho al voto pasivo, así como a acceder al cargo de elección popular, de conformidad con los votos que fueron emitidos en su favor; *iii)* a las y los ciudadanos que votaron por dicho partido político, su derecho a ser representados en los órganos legislativos y; *iv)* la efectividad del sistema de representación proporcional constitucional, cuyo objeto es garantizar la pluralidad en la integración del Poder Legislativo de la Unión.

Como punto de partida, debe señalarse que cada una de las acciones que este organismo diseñó e implementó a lo largo de las diferentes etapas del Proceso Electoral Federal 2014-2015, tuvo como objeto hacer posible la renovación del Poder Legislativo, a través del ejercicio y tutela efectiva del derecho al voto *activo* y *pasivo* reconocidos en nuestra Constitución.

Asimismo, a través del cómputo total de la elección federal, la declaratoria de validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y la asignación de diputados que corresponde por dicho principio a los partidos políticos con derecho a ello

—materia del Acuerdo referido—, se determinó la integración de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para el periodo 2015-2018.

Por ello, no puedo acompañar las determinaciones referidas, pues es mi convicción que **atentan —de forma irreparable— contra los derechos cuya tutela ha sido conferida a esta autoridad electoral nacional**. Dicho de otro modo, en mi opinión las mismas **conllevaron una distorsión al mecanismo constitucional que prevé garantizar la pluralidad de las fuerzas partidistas en la Cámara de Diputados**, pues **se trataba de entender que de la efectiva representación proporcional depende que la pluralidad política y social tenga cabida en la reflexión, interlocución y resolución de las cuestiones públicas conferidas al Poder Legislativo de la Unión**.

#### ANTECEDENTES

1. El 30 de septiembre de 2014, el Consejo General de este Instituto emitió el Acuerdo INE/CG182/2014, mediante el cual se determinó mantener los 300 distritos electorales, su respectiva cabecera distrital, el ámbito territorial y las cabeceras de las cinco circunscripciones plurinominales que se utilizarían para la jornada electoral federal del 7 de junio de 2015, así como el número de diputados elegibles por el principio de representación proporcional.

2. El 15 de octubre de 2014, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG210/2014, a través del que aprobó el Instructivo que debían observar los partidos políticos Nacionales que buscaran formar coaliciones para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

En dicho instrumento, se estableció —de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables— que el convenio de coalición, a fin de ser aprobado por el Consejo General e inscrito en el libro respectivo, debía establecer, entre otras cuestiones: el origen partidario de los candidatos a diputados de mayoría relativa que

serían postulados por la coalición, así como el grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en caso de resultar electos.

3. En la misma fecha, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG211/2014, a través del que se aprobaron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados por ambos principios y, en su caso, coaliciones para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

4. Los días 11 y 12 de diciembre de 2014, los representantes propietarios del PRI y el PVEM ante el Consejo General de este Instituto, solicitaron el registro del Convenio de coalición parcial para postular 244 fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, adjuntando la documentación respectiva; mismo que fue aprobado mediante la resolución INE/CG346/2014 de fecha 18 de diciembre de 2014, tras revisar el cumplimiento de los requisitos aplicables.

Posteriormente, el 15 de enero de 2015, el representante propietario del PRI ante el Consejo General de este Instituto, presentó la solicitud de modificación del Convenio de la coalición parcial referido, acompañando la documentación requerida. En atención a ello, el 29 de enero, el Consejo General aprobó la resolución INE/CG51/2015, determinando procedente la modificación del Convenio de coalición parcial para postular 250 fórmulas de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el PRI y el PVEM.

Finalmente, el 13 de marzo del año en curso, el representante propietario del PRI ante el Consejo General presentó una segunda solicitud de modificación al Convenio de coalición parcial, acompañando la documentación para cumplir con los requisitos. Derivado de lo anterior, el 26 de marzo del año en curso, el Consejo General emitió la resolución INE/CG118/2015 mediante la cual aprobó la modificación al convenio referido, a efecto de que la distribución de las 250 candidaturas —de conformidad con el partido político al que pertenecían originalmente los candidatos y al grupo parlamentario en que quedarían comprendidos en caso de obtener su curul— atendiera a lo siguiente: *i)* 192 para el PRI y 58 para el PVEM.

5. El 11 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG89/2015, a través del que determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que correspondan a los partidos políticos con base en los resultados que obtuvieran en la jornada electoral del pasado 7 de junio.

6. El 4 de abril de 2015 se llevó a cabo la sesión especial en la que el Consejo General emitió el Acuerdo INE/CG162/2015, a través del que en ejercicio de su facultad supletoria, aprobó el registro de las candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones, así como las candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

7. Inconforme con el Acuerdo mencionado en el antecedente anterior, el PAN interpuso ante la Sala Regional de Xalapa correspondiente a la III Circunscripción Plurinominal (en adelante “Sala Xalapa”) diversos recursos de apelación en contra de la designación de los siguientes candidatos a Diputados Federales de la coalición conformada por el PRI y el PVEM: suplente por el Distrito 3 de Quintana Roo, con cabecera en Cancún; propietario al Distrito 07 con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz; propietario al Distrito 21, del estado de Veracruz, con cabecera en Cosoleacaque; y propietaria al Distrito 4 con sede en Veracruz, Veracruz, respecto de los cuales se formaron los expedientes SX-RAP-14/2015, SX-RAP-1/2015, SX-RAP-1/2015 y SX-RAP-1/2015.

La Sala Xalapa, al resolver los recursos de apelación en cuestión, determinó confirmar el Acuerdo impugnado.

Inconforme con lo anterior, el 28 de abril el Partido Acción Nacional (en adelante “PAN”) interpuso recurso de reconsideración en contra de la sentencia dictada en el expediente

SX-RAP-17/2015. Al resolver el recurso de reconsideración correspondiente, la Sala Superior confirmó la sentencia emitida.

**8.** Durante las sesiones realizadas los días 8, 15, 22 y 29 de abril, 6, 13, 20 y 27 de mayo, así como 3, 5 y 7 de junio de 2015, el Consejo General aprobó las solicitudes de sustitución y cancelación de candidaturas a Diputados Federales presentadas por diversos partidos políticos, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

**9.** Los partidos políticos nacionales interpusieron 500 juicios de inconformidad, relativos a la elección de Diputados Federales por ambos principios, medios de impugnación tramitados por los respectivos Consejos del INE, sustanciados y resueltos por las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante “Tribunal Electoral” o “TEPJF”). Asimismo, se interpusieron 247 recursos de reconsideración en contra de las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales, relacionadas con la elección de Diputados Federales por ambos principios.

**10.** Derivado de lo anterior, las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral emitieron diversas sentencias en las que declararon la nulidad de la votación recibida en distintas casillas, por actualizarse alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 75, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que, modificaron los resultados de la elección de Diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, y determinaron la recomposición de los cómputos distritales respectivos.

Asimismo, a través del juicio de inconformidad SM-JIN-35/2015, la Sala Regional Monterrey decretó la nulidad de la elección de diputados federales de mayoría relativa correspondiente al 01 distrito electoral federal en el estado de Aguascalientes, con sede en Jesús María; sentencia que posteriormente fue confirmada por la Sala Superior.

**VOTO PARTICULAR**  
**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**

En atención a lo determinado por la autoridad jurisdiccional y acorde con el principio de certeza, para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, esta autoridad tomó en cuenta lo resuelto en dichas sentencias, para determinar la votación total que cada partido político obtuvo.

**11.** El 19 de agosto de 2015, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (en adelante “DEPPP”) solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (en adelante “DEOE”), los resultados del cómputo de las elecciones de Diputados por ambos principios, incluyendo las respectivas recomposiciones de la votación, de conformidad con las resoluciones emitidas por las Salas Superior y Regionales del TEPJF.

En atención dicha la solicitud, la DEOE remitió a la DEPPP el 21 de agosto los resultados y porcentajes definitivos de la elección de Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, obtenidos por los partidos políticos y las coaliciones que participaron en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, conforme a los cómputos distritales que quedaron firmes y las recomposiciones de votos realizadas por las Salas del Tribunal Electoral, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 1 de la LGIPE.

**12.** El 13 de agosto de 2015, en sesión extraordinaria se aprobó el Acuerdo del Consejo General de este Instituto por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que les corresponden para el periodo 2015-2018 y, derivado de ello, hizo entrega a los representantes de dichos institutos políticos de las constancias correspondientes.

## CONSIDERANDOS

**PRIMERO.** Como he señalado en el preámbulo de este pronunciamiento, **mi primer motivo de disenso respecto del Acuerdo aprobado se construye a la determinación de validar que militantes del PRI, cuyo registro como candidatos de mayoría relativa fue asignado indebidamente al PVEM —merced al convenio de coalición firmado por dichos institutos políticos— y obtuvieron el triunfo en la elección del Proceso Electoral Federal 2014-2015, sean contabilizados a éste para efectos de la distribución de diputados por el principio de representación proporcional.**

**Para efecto de exponer las razones** por las que considero que esta determinación es contraria a los principios y objetos que persigue el sistema de representación proporcional constitucional vigente, en primer término, **daré cuenta de los criterios que a través de las sentencias emitidas por las Salas Regionales y Superior del Tribunal Electoral** se han establecido con motivo de la interposición de recursos de apelación y reconsideración, así como de juicios de revisión constitucional, cuyos agravios guardan relación el supuesto que he referido.

Ello cobra particular relevancia, por el hecho de que al momento en que esta autoridad debía aprobar la distribución de diputados por el principio de representación proporcional, existía una posible contradicción de criterios derivada de las sentencias emitidas por las Salas Xalapa y Monterrey del Tribunal Electoral; y si bien dichos criterios no eran vinculantes para esta autoridad, su estudio resultaba insoslayable en términos orientadores a fin de adoptar una decisión que resultara acorde al sistema de representación proporcional previsto en la Constitución.

Al respecto, es importante señalar que la Sala Monterrey sometió a consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral<sup>1</sup> la posible contradicción de criterios sostenidos entre

---

<sup>1</sup> En atención a ello, se conformó el expediente SUP-CDC-8/2015, mismo que fue turnado al Magistrado Presidente de la Sala Superior el 24 de julio pasado.



las sentencias que emitió respecto del juicio de revisión constitucional electoral SM-JRC-2/2014 y su acumulado SM-JRC-3/2014, y las emitidas en los recursos de apelación SX-RAP-14/2015, SX-RAP-16/2015, SX-RAP-17/2015 y SX-RAP-18/2015 por la Sala Xalapa; sin embargo, a la fecha la Sala Superior no se ha pronunciado.

**Esencialmente, la posible contradicción de criterios que aún prevalece se constriñe al hecho de que mientras la Sala Monterrey sostuvo que el origen partidario de un candidato es determinante para decidir el grupo parlamentario al que pertenecerá y, en función de ello, a qué partido le serán contabilizados los escaños para efectos de la distribución de diputados por el principio de representación proporcional, pues lo contrario afectaría el sistema de representación proporcional; la Sala Xalapa estableció que tratándose de partidos políticos coaligados, procede el registro de un candidato por un partido político a pesar de ser militante activo de otro de los partidos que conforman la coalición, precisando que ello no vulnera el límite de sobrerrepresentación, fundándose principalmente en que la normativa de este partido permite postular a un ciudadano externo o no militante. Las Salas Regionales basaron sus determinaciones en los razonamientos siguientes:**

#### **A. Criterio de la Sala Monterrey**

La **Sala Monterrey**, al resolver los juicios de revisión constitucional SM-JRC-2/2014 y su acumulado SM-JRC-3/2014, **determinó revocar parcialmente el Acuerdo 14/2014 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (en adelante “IEPCC”), relativo a la aprobación del registro de la coalición “Todos Somos Coahuila”** —formada por el PRI, PVEM, Nueva Alianza, Social Demócrata de Coahuila, Joven, Primero Coahuila, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular—, al considerar **fundado el agravio relativo a que el convenio de coalición conlleva un fraude a la ley, dado que permite: i) ilegalmente que militantes del PRI participen como candidatos de otros partidos coaligados con el propósito de lograr su**

sobrerrepresentación<sup>2</sup> y; *ii) que los escaños obtenidos por fórmulas conformadas por militantes del PRI se contabilicen a otros partidos para efectos de la representación proporcional.*

En ese sentido, la Sala Monterrey determinó que **el hecho de que el Código Electoral local en su artículo 60, párrafo 1, inciso k) establezca que el convenio de coalición debe señalar “en caso de coalición parcial, la especificación del partido que se considerará como ganador en cada distrito en que participen coaligados, para efectos de la representación proporcional”, no implica necesariamente que los partidos suscribientes puedan libremente convenir ese aspecto** atendiendo únicamente a su voluntad o deseo.

A la luz de lo anterior, en la sentencia se estableció que **cuando un ciudadano es militante activo de un partido y, sin renunciar a dicha militancia, es postulado por varios partidos a través de una coalición —bajo un emblema y una plataforma política aprobados por los partidos integrantes—, resultaría disconforme con los límites y principios constitucionales que rigen el sistema de representación proporcional, que se pueda llegar a pactar o negociar de manera estratégica que de obtener el triunfo, el escaño será contabilizado a un partido distinto al que se encuentra afiliado, para efectos del procedimiento de asignación.**

Ello, precisando que **no existe razón suficiente para que los partidos cuenten con esta facultad y puedan evadir los límites constitucionalmente previstos** para garantizar la pluralidad y proporcionalidad en la integración de la legislatura.

---

<sup>2</sup>Ello, específicamente por lo que hace respecto de las candidaturas de mayoría relativa para los distritos II, VIII, IX y X de Coahuila, cuyos candidatos eran militantes del PRI y, no obstante ello, se validó el convenio presentado por la *Coalición* en que se consignó que en caso de que dichos contendientes resultaran ganadores, pertenecerían a los grupos parlamentarios de los partidos Socialdemócrata de Coahuila, Primero Coahuila, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, respectivamente.

Desde esa perspectiva la Sala Monterrey consideró que sostener lo contrario, **no es conforme con el diseño constitucional en estudio, y ocasiona** directamente la consecuencia negativa de **una distorsión en el cálculo de los porcentajes de sobre y sub-representación de los partidos** contendientes, así como del número de escaños que pueden alcanzar por ambos principios, lo cual evidentemente va en contra de los principios básicos que rigen la integración del órgano legislativo.

Bajo estas consideraciones, **ordenó modificar el acuerdo** por el que se aprobó la solicitud de registro del convenio de coalición, **para efecto de que: i)** se requiriera a la DEPPP que informara si diversos ciudadanos se encontraban incluidos en el padrón de afiliados del PRI y; **ii) si alguno de los ciudadanos referidos por los accionantes era militante del PRI, se estableciera en el convenio respectivo que en caso de resultar electo, su escaño correspondería a dicho instituto político y se le contabilizaría para la distribución de diputados por el principio de representación proporcional.**

En acatamiento a la sentencia mencionada, el IEPPC resolvió **que en caso de resultar ganadores los candidatos** relacionados con la sentencia, se estimaría que **su curul de mayoría relativa representaría al PRI local y se contabilizaría para dicho partido para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.**

Contra dicho Acuerdo, el PRI y los candidatos involucrados presentaron juicios electorales ante el Tribunal Local, quien resolvió sobreseer y desestimar los agravios planteados por los recurrentes, que sustancialmente se constreñían a establecer que previamente a la determinación del IEPPC, los candidatos habían renunciado a su militancia priista e incluso se habían afiliado a diversos partidos políticos, para lo cual aportaron distintos medios de convicción.

Lo anterior, bajo el argumento central de que los actores no probaron que hubiesen realizado las diligencias necesarias para comunicar sus renunciadas al INE o bien al IEPPC, para que se les diera de baja del padrón de afiliados del PRI.

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Posteriormente, la sentencia emitida por el Tribunal local fue impugnada ante la Sala Regional de Monterrey, quien resolvió confirmarla, bajo las consideraciones siguientes: *i)* los actores no comparecieron, en su oportunidad, como terceros interesados en el juicio SM-JRC-2/2014 y su acumulado SM-JRC-3/2014 —de acuerdo con el derecho que les otorga la Ley de Medios local—, cuyos efectos versaron respecto del convenio de coalición y su registro; *ii)* las pruebas para acreditar que no se encontraban afiliados al PRI no se aportaron en el momento procesal oportuno y; *iii)* el informe de la DEPPP no da lugar a una nueva cadena impugnativa, dado que las renunciaciones al PRI no pretenden demostrar la falsedad del informe, sino el hecho de que no es cierto lo alegado por el PAN en su demanda.

**B. Criterio Sala Xalapa**

En el caso de la **Sala Xalapa**, como se refiere en los antecedentes de este pronunciamiento, se promovieron recursos de apelación contra el registro de candidatos a Diputados Federales postulados por la coalición conformada por el PRI y el PVEM, cuyos **agravios** se constreñían a lo siguiente: *i)* **la postulación de los candidatos** en cuestión por parte del PVEM no obstante que son militantes del PRI, **contraviene el artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos** (en adelante “LGPP”); *ii)* los registros **no se ajustan al convenio y ponen de manifiesto que la autoridad no fue exhaustiva** en la verificación de ese dato y; *iii)* la situación referida **constituye un fraude a la ley, porque esa simulación de actos puede provocar una sobrerepresentación**, ya que en el supuesto de que dichos candidatos ganen la elección en el distrito, es muy probable que dejarán al grupo parlamentario del PVEM, para pasar a formar parte del grupo parlamentario del PRI, lo que podría equipararse con una transferencia de votos y de curul.

Al resolver los recursos de apelación en cuestión, **la Sala Xalapa determinó confirmar el Acuerdo impugnado**, a partir de las consideraciones siguientes:

- 1. Los partidos políticos carecen de interés jurídico para impugnar una norma interna de un partido político diverso** y, en razón de ello, para que sea procedente la impugnación de un partido político en contra del registro de un candidato postulado por

otro, es necesario que invoque que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Constitución o ley electoral. Lo anterior, dado que no perjudica a un partido político el hecho de que un candidato de otro partido haya sido seleccionado sin cumplir algún requisito estatutario del postulante.<sup>3</sup>

Al respecto, **estableció que el requisito** previsto en el artículo 91, párrafo 1 de la LGPP **—relativo a señalar, de ser el caso, el partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el grupo parlamentario o partido político en que quedarían comprendidos en caso de resultar electos—, es un requisito que debe estar comprendido en el convenio de coalición** para obtener el registro y sólo es deber del partido manifestar por escrito que los candidatos fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del partido —en términos de lo dispuesto por el artículo 238, párrafo 3 de la LGIPE.

**2. Determinó infundado el agravio relativo a la falta de pertenencia al PVEM de los candidatos**, en contravención del artículo 91, párrafo 1 de la LGPP, en atención a los argumentos siguientes:

**i) El PAN parte de una premisa incorrecta, al considerar que las candidaturas reservadas al PVEM en el convenio de coalición deben recaer necesariamente en sus militantes, dado que sus disposiciones estatutarias le otorgan la potestad para postular a adherentes, simpatizantes o ciudadanos externos como candidatos a cargos de elección popular por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y miembros de los Ayuntamientos, en el ámbito federal, estatal, municipal o delegacional —artículo 18, fracción XII de los Estatutos del PVEM—. En este sentido, aun cuando se acreditara que los candidatos registrados militan en un partido diverso al PVEM, su postulación no resultaría contraria a derecho.**

---

<sup>3</sup> Al respecto se precisa que por un lado están los requisitos que deben cubrir los partidos políticos que pretenden coaligarse —previstos en el LGPP, en el título “De los frentes, las coaliciones y las fusiones” y el artículo 12, párrafo 2 de la LGIPE— y, por el otro, los requisitos exigibles a los candidatos —establecidos en la LGIPE, en su capítulo III “Del procedimiento de registro de candidatos”.

*ii)* La regla general de **prohibición** contenida en el artículo 87, párrafo 6, de la LGPP, **relativa a que ningún partido político podrá registrar a un candidato de otro partido político, encuentra como excepción los casos en que medie una coalición**, como acontece en el presente asunto.

*iii)* La **postulación en cuestión se inscribe en el ejercicio del derecho del PVEM a la auto-organización**, para elegir a sus candidatos en los distritos que le fueron reservados en el convenio y decidir cuáles son los mejores perfiles para representarlo en una contienda electoral.

3. Consideró **infundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad por parte de este Consejo General**, toda vez que **de manera fundada y motivada realizó el registro solicitado por la coalición** en observancia del principio de buena fe —que evita en la medida de lo posible la intervención de la autoridad en la vida interna de los partidos políticos—, y la celeridad propia de las etapas del proceso electoral.

**Precisando al respecto que el requisito relativo a establecer el origen partidario y el grupo parlamentario** a que pertenecerá el candidato en caso de resultar electo **no es sujeto de prueba** —pues basta con la manifestación por escrito por parte de la coalición—, **por lo que, no es necesario que el Instituto realice algún tipo de indagatoria o investigación** sobre el particular.

4. De la revisión de los expedientes relativos al registro de **los candidatos** en cuestión se advierte que **cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Acuerdo INE/CG211/2014**, en que se establecen los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputados por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones.

5. El **agravio relativo a la sobrerrepresentación en la integración del Congreso, es infundado por una parte e inoperante por otra**, dado que el argumento expuesto

para tal efecto se refiere a momentos diversos en la línea del tiempo del proceso electoral.

Al respecto, señaló que: *i)* **el requisito del artículo 91, párrafo 1, inciso e) de la LGPP, en un primer momento, se cumple dado que en la solicitud de registro se establece que la postulación pertenece al PVEM y; ii) es inoperante el argumento relativo a que es probable que dichos candidatos al ganar la elección dejarán al grupo parlamentario del PVEM y pasarán a formar parte del grupo parlamentario del PRI, dado que dicha consecuencia jurídica deriva de hechos futuros de realización incierta.**

Inconforme con lo anterior, el **PAN interpuso recurso de reconsideración** en contra de la sentencia dictada en el expediente SX-RAP-17/2015, **señalando como agravio el hecho de que la Sala Regional de Xalapa implícitamente inaplicó los artículos 41, párrafo 2, Base primera, de la Constitución y, 23, párrafo 1, inciso a), de la LGPP**, al resolver que el PAN carece de interés jurídico para impugnar el incumplimiento de una norma interna de un partido político diverso, sin considerar que es una entidad de interés público, de ahí que se encuentra legitimado para actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo, como en el caso lo es el convenio de coalición para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso electoral federal 2014-2015, ya que es un acto simulado, no auténtico.

Al resolver el recurso de reconsideración, **la Sala Superior confirmó la sentencia emitida** y declaró infundado el agravio porque no se acredita la pretendida inaplicación de los artículos que refiere el recurrente, pues es evidente que el estudio de la sentencia no se hizo sobre aspectos de constitucionalidad, ni su pretensión consistió en que se inaplicara alguna disposición, sino que se ciñó exclusivamente a cuestiones de legalidad respecto del Acuerdo INE/CG162/2015 de este Consejo General.

En mi opinión **dado el alcance de las sentencias referidas, esta autoridad debió retomar el criterio de la Sala Monterrey, en tanto que ésta analiza los afectos que el**

supuesto en cuestión tiene la efectividad del sistema de representación proporcional.

**SEGUNDO.** Dada la relevancia de la determinación que debía adoptar el Consejo General, en primer término, era indispensable advertir: ¿por qué nuestro sistema político-electoral prevé **el sistema de representación proporcional** para la integración del Congreso de la Unión? Tal como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su incorporación en la Constitución —desde 1977— **atiende al propósito de “garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación”**. En ese sentido, la Suprema Corte<sup>4</sup>, ha señalado que:

“[...]

*(...) dentro del sistema político mexicano se introdujo el principio de representación proporcional, como medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aún minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país. Así, se desprende que el principio de representación proporcional dentro del sistema electoral mixto se traduce, en instrumento del pluralismo político que llevó a su inserción en la Constitución Federal desde el año de mil novecientos setenta y siete y que a la fecha se mantiene vigente.*

***El principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, tiene los siguientes objetivos primordiales:***

---

<sup>4</sup> Sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2009 y su acumulada 3/2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2009. Cabe referir que las consideraciones transcritas fueron aprobadas por unanimidad de 11 votos.



1.- *La **participación de todos los partidos políticos** en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.*

2.- *Que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una **representación aproximada al porcentaje de su votación total.***

3.- ***Evitar un alto grado de sobrerrepresentación** de los partidos dominantes.*

[...]"

(Énfasis añadido).

**En aras de lo anterior, nuestra Constitución** —a través de su artículo 54, fracción V— **prevé** reglas específicas para evitar la desproporcionalidad en la integración de los órganos legislativos; en particular, **un tope de sobrerrepresentación**, según el cual *“En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida”*<sup>5</sup>.

A la luz de lo anterior y **precisamente por la relevancia que esta determinación tiene para la vigencia del Estado democrático de derecho, es que me encuentro en contra del criterio adoptado** por la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales, pues el mismo pervierte el sistema de representación proporcional, y atenta contra su efectividad.

**Sostener que no existe impedimento para que los militantes de uno de los partidos políticos que integran una coalición sean registrados como candidatos de mayoría relativa por otro** de los partidos coaligados y, en consecuencia, los triunfos que obtuvieron sean contabilizados en su favor para efectos de la distribución de diputaciones

---

<sup>5</sup> Cabe mencionar que la porción normativa en cita establece una salvedad: “Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento.”.

por el principio de representación proporcional, **es no entender que de la efectividad del sistema de representación proporcional depende la vigencia del pluralismo político en el ámbito parlamentario.**

**Si bien es cierto** —como lo señala el proyecto y lo manifesté en el marco de la sesión—, **que esta autoridad validó el convenio de coalición suscrito por el PRI y el PVEM**, mismo que contenía la distribución de las candidaturas en función del origen partidario informado, **ello en modo alguno conlleva la imposibilidad de realizar un análisis diverso, para efectos de la distribución de diputados por el principio de representación proporcional.** Se trata de dos momentos o etapas distintas, que exigían ser analizadas a la luz de sus finalidades, y de los bienes jurídicos que tutelan, mismos que también son distintos.

Con **la aprobación del convenio de coalición**, lo esta autoridad **garantizó** fue **la posibilidad de que los candidatos postulados por la coalición pudieran participar** en las campañas electorales, que pudieran **ejercer su derecho al voto pasivo, y en su caso, acceder al cargo de elección popular para el que hubieran sido electos.** En ese momento, esta autoridad no prejuzgó —pues no cuenta con facultades para hacerlo— respecto de los resultados que surgirían de la jornada electoral, y los efectos que los mismos eventualmente podrían tener en el sistema de representación, en cuanto a la integración de la Cámara de Diputados.

Al respecto, es importante tener presente que el artículo 91 de la LGPP establece claramente como requisito para la suscripción y registro de los convenios de coalición, señalar el partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el grupo parlamentario o partido político en que quedarían comprendidos en caso de resultar electos; en razón de ello, es válido sostener que, al momento del registro del convenio, no resultaba exigible a esta autoridad verificar la veracidad de lo manifestado por los institutos políticos coaligados, pues esta determinación partidista no tiene —en sí— efectos en el sistema de representación de los partidos, sino hasta después de la jornada electoral, derivado de los resultados electorales obtenidos en la misma por los distintos partidos políticos, y en la medida que

alguno de ellos obtiene un número de triunfos suficiente para colocarlo en el supuesto de sobrerrepresentación previsto en la fracción V del artículo 54 constitucional.

Desde esta perspectiva, también debemos considerar que el principio de buena fe en la materia electoral, atiende al hecho de que los partidos políticos son entidades de interés público y, en consecuencia, la primera exigencia que recae sobre ellos, es justamente que su actuar se ciña al marco jurídico que busca la vigencia del Estado de derecho y de sus principios. Pensar lo contrario, es eximirles de su responsabilidad primaria, poniendo en riesgo el interés público.

Ahora bien, **para efectos de determinar la distribución de diputados por el principio de representación proporcional** —a través del Acuerdo materia del presente voto particular—, **lo que teníamos que tutelar era** un bien jurídico distinto: precisamente **que la integración de la Cámara de Diputados**, a partir de los resultados electorales, **cumpliera con el límite de sobrerrepresentación constitucional**; es decir, impedir que cualquier partido político tuviera un número de escaños mayor al que la Constitución le permite, **en aras de privilegiar el pluralismo político que debe caracterizar nuestro régimen democrático**.

Con tal objeto, estábamos obligados a revisar: **i)** los triunfos obtenidos por cada uno de los partidos en las candidaturas por mayoría relativa, para efectos de determinar si a alguno de los partidos le debía ser aplicada la cláusula de sobrerrepresentación; y **ii)** el número de votos emitidos a favor de cada uno de los institutos políticos en lo individual para, a partir de éstos, determinar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.

Estoy convencida que **esta determinación debía tener como objeto fundamental la tutela los límites y principios constitucionales que rigen el sistema mismo de representación proporcional**.

Ahora bien, ¿con qué información contábamos para tomar esta decisión? En primer lugar, **teníamos la certeza de que**, a partir de los resultados de la jornada electoral del 7 de junio pasado, un partido político —**el PRI**— **caía en el supuesto de** la cláusula de

**sobrerrepresentación.** Derivado de esto, en el proyecto sometido a nuestra consideración, adecuadamente se proponía ajustar que el número de diputados que se le asignarían por el principio de representación proporcional.

En segundo lugar, **sabíamos que** dicho instituto político **participó en las elecciones a través de una coalición parcial con el PVEM, en 250 distritos electorales, de los cuales** —según el convenio de coalición suscrito entre ellos y aprobado por esta autoridad— **58 corresponderían a candidatos que tenían un origen partidista correspondiente al PVEM.**

En tercer lugar, **al advertir que entre estos** 58 candidatos asignados al PVEM, de conformidad con la información proporcionada por la DEPPP, **se encontraban 8 diputados propietarios y 6 diputados suplentes que obtuvieron el triunfo y, contrario a lo que sostenía el convenio de coalición, eran militantes del PRI; resultaba exigible que analizáramos los efectos que tal supuesto tenía para la efectiva aplicación del principio de representación proporcional.**

¿Por qué resulta relevante esta situación? Precisamente, **porque derivado del número de votos y de diputados de mayoría relativa que obtuvo el PRI, a diferencia de los demás partidos políticos, correspondía aplicarle la cláusula de sobrerrepresentación.**

En este sentido, **coincido con el criterio de la Sala Monterrey relativo a que resultaría disconforme con los límites y principios constitucionales que rigen el sistema de representación proporcional, que se pueda llegar a *pactar o negociar de manera estratégica* que el escaño obtenido por un candidato que es militante de determinado partido, sea contabilizado a otro instituto político integrante de la coalición, para efectos del procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional.**

Es mi convicción que **evadir —a través de la figura de las coaliciones— los límites de sobrerrepresentación en la integración de la Cámara de Diputados, en detrimento de la pluralidad y representatividad inherentes al sistema de representación proporcional vigente, constituye un fraude a la ley.**

De ahí, que **esta autoridad debía asignar los escaños de los candidatos referidos al PRI y contabilizárselos para determinar cuántas diputaciones le correspondían por el principio de representación proporcional.** Lo anterior, máxime que el PRI aún sin que le fueran asignados dichos candidatos, ya se encontraba en el supuesto de sobrerrepresentación.

**Al determinar lo contrario, se ocasionó** directamente la consecuencia negativa de **una distorsión en el cálculo de los porcentajes de sobrerrepresentación y sub-representación de los partidos** contendientes, **así como del número de escaños que podían alcanzar por ambos principios,** lo cual evidentemente va en contra de los principios básicos que rigen la integración del órgano legislativo.

**El derecho de auto-organización** de los partidos políticos **no puede estar por encima del sistema de representatividad,** más aún cuando nos encontramos ante un fraude a la ley que contraviene la naturaleza de entidades de interés público que la Constitución otorga a los partidos.

**Tampoco es admisible alegar,** como se pretende en el Acuerdo aprobado, **que una determinación diversa a la adoptaba podía implicar una afectación al derecho al voto activo** en contra de la voluntad plasmada por las y los ciudadanos, sustancialmente por lo siguiente:

- i)* En la boleta electoral no se distingue respecto de los candidatos postulados por una coalición, a cuál de los partidos que la integran corresponde su registro; en función de ello, el voto que emite el ciudadano no guarda relación directa con el origen partidario del candidato, ni tiene efectos para la determinación de su grupo parlamentario. Es decir, la voluntad del ciudadano no está asociada al origen partidario de los candidatos, ni al grupo parlamentario al que pertenecerán.
- ii)* Derivado de lo anterior, si bien se incluyen los emblemas de cada uno de los partidos coaligados a fin que el ciudadano pueda plasmar si el voto que emite es en favor de uno de ellos específicamente o de ambos, ello tiene por objeto que esta autoridad

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

tenga certeza del número de votos emitidos en favor de cada instituto político para otros efectos —verificar que cumplió con el porcentaje de votos requeridos para conservar su registro; y determinar las prerrogativas a que tienen derecho, de acuerdo con el porcentaje de votación que recibió, tanto por lo que hace al monto de financiamiento público, como a los tiempos en radio y televisión que le corresponden.

*iii)* Por lo que hace al voto por los candidatos por el principio de representación proporcional, tampoco se afectaría la voluntad del ciudadano, pues cuando vota por el candidato de mayoría relativa de un partido, también vota por la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional que éste<sup>6</sup>registró. En el mismo sentido, cuando emite su voto a favor de uno o varios de los partidos que abanderan a un candidato bajo la figura de coalición su voto también es tomado en consideración para las listas de representación proporcional de dichos institutos políticos, por lo que no se afectaría su determinación.

Finalmente, **no se trata** —como algunos señalaron en el marco de la sesión del Consejo General— **de desconocer el triunfo que los candidatos por el principio de mayoría relativa obtuvieron en las urnas**. Éstos ya son diputados electos y ya obtuvieron su constancia de mayoría. La discusión no versaba sobre eso.

**El punto a analizar se constreñía precisamente a determinar si tales triunfos debían ser contabilizados al PVEM —a pesar de tratarse de militantes del PRI—, o a este último instituto político. Y las consecuencias de esta decisión tenían —como lo tuvieron— un efecto directo en la distribución de Diputados Federales por el principio de representación proporcional**, dado que respecto al PRI se actualizó el

---

<sup>6</sup>Al respecto, la Sala Superior a través de la Jurisprudencia 33/2012 —de rubro “CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. PUEDEN REALIZAR ACTOS DE CAMPAÑA EN PROCESOS ELECTORALES (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES)”—, ha establecido que las candidaturas contenidas en tales listas son votadas de manera directa, razón por la que se determinó que tales contendientes tenían derecho a realizar actos de campaña y los electores pueden valorar la conformación de las listas de candidatos de representación proporcional, a efecto de decidir si otorgan o no su voto a la opción política de mayoría relativa.

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

supuesto de subrepresentación previsto en el artículo V del artículo 54 constitucional —ya que, incluso sin considerar a los Diputados por mayoría relativa del PVEM a que he hecho referencia, el número de curules que le correspondería asignar superó en 17 el límite máximo calculado para determinar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados—, por lo que, de las 65 diputaciones que inicialmente debían serle asignadas por el principio de representación proporcional, se le dedujeron 17, para quedar con un total de 48, a fin que su número total de diputaciones por ambos principios se ajustara a los límites previstos, y el resto de las diputaciones —las 17 que le fueron deducidas al PRI— fueron distribuidas entre los demás partidos políticos, en los términos previstos en la Constitución.

Dicho de otro modo, **se trataba de determinar el número real de diputaciones que, por el principio de representación proporcional, debían ser asignadas al PRI, y las que debían ser distribuidas entre los partidos políticos restantes** —atentos a las previsiones y los límites de sobrerrepresentación constitucionalmente previstos. Se trataba así, **de garantizar que los votos de las y los ciudadanos se vieran reflejados adecuadamente, en términos del sistema de representación proporcional, en la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.**

Las razones expuestas sostienen mi diferendo con el Acuerdo, pues **es mi convicción que la determinación adoptada afectó de manera irreparable el sistema de representación proporcional**, ya que como consecuencia de la misma, **fueron asignadas al PRI más diputaciones de las que le correspondían, pervirtiendo —a partir de un acuerdo de voluntades plasmado en un convenio de coalición— el límite de sobrerrepresentación que prevé nuestra Constitución.**

La cuestión **no se reduce al número de diputados como tal que le serán asignados a cada uno de los partidos políticos**, sino a las repercusiones que ello tiene para el sistema político-electoral vigente. **Se afectó la pluralidad que busca garantizar la Constitución y, en consecuencia, la tutela efectiva de los derechos asociados al sistema político-electoral.**

**TERCERO.** Como he señalado, aunado a lo anterior **estoy en contra de** que la mayoría de las Consejeras y los Consejeros Electorales hayan decidido **omitir establecer** en el Acuerdo aprobado **que si derivado de los resultados de la elección extraordinaria** a celebrarse en el distrito electoral federal 01 del estado de Aguascalientes, con sede en Jesús María, **se determina que el Partido del Trabajo** obtiene el 3% de la votación en la elección de Diputados Federales, y derivado de ello, **conserva su registro, deben llevarse a cabo las adecuaciones correspondientes a la distribución de diputados por el principio de representación proporcional.**<sup>7</sup>

Nuevamente nos encontrábamos ante una cuestión de la mayor trascendencia por los derechos y los principios que debían tutelarse a través de esta determinación. En mi opinión, **indebidamente, y en contra de los derechos que la Constitución reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, se restringió al Partido del Trabajo se derecho a acceder, en su caso, a las diputaciones que le corresponden por el principio de representación proporcional.**

En ese sentido, lo primero que habría que advertir, es que **formalmente no se ha declarado la pérdida del registro del Partido del Trabajo**, y en relación con esto, la primera cuestión a dilucidar para adoptar una decisión como la propuesta era justamente dar certeza al partido político —y por ende a sus militantes y afiliados— respecto del momento en que esta autoridad podrá emitir una declaratoria de esta naturaleza, y los elementos que deben cumplirse o actualizarse para tal efecto.

Si bien en el marco de la sesión del Consejo General, esta discusión no se abordó a fondo, lo cierto es que ello derivó de que no era la materia del Acuerdo sometido a consideración del máximo órgano de dirección —pues incluso, dicha determinación no

---

<sup>7</sup> Al respecto, es importante precisar que si bien el Partido Humanista también se encuentra sujeto al procedimiento para determinar su pérdida de registro, dado el número de votos que hasta el momento tiene a su favor, no es posible presumir que con motivo de los resultados que arroje la elección extraordinaria obtenga el número de votos necesario para conservarlo; a diferencia de lo que ocurre con el Partido del Trabajo, derivado el porcentaje de votación con que cuenta actualmente.



corresponde al Consejo General, sino a la Junta General Ejecutiva de este Instituto—; no obstante, la misma sí resultaba relevante para determinar la distribución de Diputados Federales por el principio de representación proporcional.

Sobre este punto, vale la pena señalar que, si bien es mi convicción que la determinación de la pérdida del registro del Partido del Trabajo sólo será posible una vez que esta autoridad cuente con los resultados de la elección extraordinaria ya referida, resulta exigible a esta autoridad dar certeza respecto del momento en que se colma el supuesto previsto en la norma, dado que existen diversas interpretaciones posibles a las previsiones constitucionales y legales aplicables al caso. Me explico.

El artículo 41 constitucional es claro al señalar en el párrafo cuarto de su Base I, que: *“El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida **en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.**”*

No obstante, la regulación de esta hipótesis a través de la LGPP, agrega un elemento a la previsión constitucional, al establecer como causa de pérdida de registro de un partido político: *“No obtener **en la elección ordinaria inmediata anterior**, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales [...]*”

Es decir, a pesar de que la Constitución establece que el porcentaje o umbral de votación exigido a un partido político para conservar su registro se asocia a los resultados de la elección celebrada, la ley lo restringe a que sea respecto de la elección ordinaria. Se trata de una previsión inconstitucional, pues excede las limitaciones a los derechos prevista constitucionalmente.

VOTO PARTICULAR  
LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES

Al respecto, esta autoridad no puede obviar que el artículo 1 de la Constitución nos obliga a “*promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos*”, a partir de la interpretación de las normas que favorezca “*en todo tiempo a las personas la protección más amplia*”. Tampoco puede obviar que el mismo artículo constitucional mandata que el ejercicio de los derechos humanos “***no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece***”.

Desde esta perspectiva, al contar con una disposición legal asociada al ejercicio de los derechos que excede los límites constitucionales para su restricción, resulta aplicable la interpretación que garantice la tutela efectiva del ejercicio de los derechos. En el caso, los del partido político, sus militantes y afiliados. Es decir, correspondía establecer que para determinar la pérdida del registro del Partido del Trabajo, resultaba indispensable contar con la votación válida emitida de la totalidad de los distritos electorales federales.

Una interpretación contraria conllevaría que a las y los ciudadanos de uno o varios distritos electorales, cuyas elecciones hayan sido anuladas —como en el caso, por causas no imputables a ellos—, se les niegue el derecho a que su voto incida no sólo en la decisión del ganador de una determinada contienda, sino en la determinación asociada a la permanencia de un partido político en el sistema de partidos.

En el caso bajo análisis se puede pensar que la afectación es menor, pues únicamente se anuló la elección de un distrito electoral; sin embargo, no podemos obviar que también es mínimo el número de votos que actualmente colocan al Partido del Trabajo en la posibilidad de perder su registro, ya que obtuvo el 2.99% de la votación válida emitida en 299 de los 300 distritos de la elección para Diputados Federales.

Aunado a esto, no debe pasarse por alto que, con su decisión, esta autoridad adoptó un criterio que podría resultar aún más grave, de darse el supuesto de elecciones extraordinarias asociadas a un número considerable de distritos.

En segundo término, dado que como he señalado no se ha determinado formalmente la pérdida de registro del Partido del Trabajo, **la decisión en torno a la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional, debía partir de un hecho: este Instituto está obligado a tutelar el ejercicio de sus derechos y el acceso a sus prerrogativas** y, con tal objeto, a actuar bajo la interpretación del marco constitucional y legal vigente que resulta más favorable para ello.

La tutela efectiva de sus derechos implicaba prever que si derivado de los resultados de la elección extraordinaria conserva su registro, debe ser partícipe del reparto de diputados por el principio de representación proporcional.

**Una determinación contraria, conlleva la violación de los derechos que la Constitución reconoce al Partido del Trabajo y un trato diferenciado**, a partir de una situación jurídica —pérdida de registro— que aún no se ha actualizado.

En tanto esta autoridad no cuente con los resultados del cómputo total de los 300 distritos electorales uninominales para la elección de Diputados Federales celebrada, no es posible determinar si el Partido del Trabajo cuenta con el porcentaje de votación emitida que le exige la Constitución para conservar su registro. En ese sentido, **es inadmisibles que esta autoridad electoral nacional adopte cualquier determinación que implique una restricción a sus derechos, máxime si no se encuentra expresamente prevista en la Constitución.**

**En tanto no se actualice formalmente el supuesto de pérdida de registro** —cuya consecuencia es: *i)* que un partido político deje de ser partícipe de las finalidades que la Constitución atribuye a esa categoría de organizaciones<sup>8</sup> y; *ii)* clausurar un cauce de participación política a través del cual cierto sector de la ciudadanía ejerce sus derechos

---

<sup>8</sup> Como son: participar en los procesos electorales federales, de las entidades federativas y municipales; promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación política; y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, en términos de lo previsto en el artículo 41 constitucional.

de asociación, de expresión, de votar y ser votado, entre otros—, **estamos obligados a tutelar los derechos del Partido del Trabajo.**

La razón, los partidos políticos tienen en nuestro régimen democrático una función fundamental para: *i)* que el poder público emane del pueblo; *ii)* se tutele el ejercicio de los derechos políticos —a saber, los derechos de asociación con fines políticos y al voto activo y pasivo—; *iii)* el pueblo ejerza su soberanía a través de los Poderes de la Unión y; *iv)* la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realice mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases que establece la Constitución.

En otras palabras, la existencia de los partidos políticos y el establecimiento de sus derechos, obligaciones y prerrogativas insoslayablemente deben ser vistas desde la perspectiva de la función que desempeñan en un sistema democrático, cuya base esencial es la tutela efectiva de los derechos. Es decir, a la luz del pacto social.

Desde esta perspectiva, **me aparto de la determinación adoptada** —que carece de asidero legal—, **cuyas consecuencias son:** *i)* restringir al Partido del Trabajo su derecho a tener en la Cámara de Diputados una representación aproximada al porcentaje de su votación total, en los términos que prevé la Constitución; *ii)* afectar de forma irreparable el derecho al voto pasivo de sus candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional, así como su derecho a acceder al cargo de elección popular, de conformidad con los votos que fueron emitidos en su favor; *iii)* impedir a las y los ciudadanos que votaron por dicho partido político, su derecho a ser representados en los órganos legislativos y; *iv)* el quebranto de la vigencia del sistema de representación proporcional constitucional, cuyo objeto es hacer efectiva la pluralidad en la integración del Poder Legislativo de la Unión.

**CUARTO.** Por las razones expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafos segundo y tercero de la Constitución; 35, 36, párrafo primero y 39, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y

**VOTO PARTICULAR**  
**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**

Procedimientos Electorales, 13, párrafo 1, fracción b), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y 26, párrafo 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, **presento VOTO PARTICULAR**, respecto del punto único del orden del día de la Sesión Extraordinaria del Consejo General del INE celebrada el pasado 23 de agosto de 2015, **relativo al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, los diputados que les corresponden para el periodo 2015-2018.**

---

**LIC. A. PAMELA SAN MARTÍN RÍOS Y VALLES**  
**CONSEJERA ELECTORAL**